

En los extremos están los unos: esos que creen que los megaproyectos son una desgracia para el ambiente y las comunidades, y los otros: aquellos que profesan que con su sola ejecución se generan beneficios a la economía y la sociedad.

Así el Gobierno, frente a su Plan de Desarrollo, encuentra una oposición creciente a minas, represas, obras de infraestructura y desarrollos urbanos. Este no es un fenómeno eminentemente colombiano: grandes obras de infraestructura en Perú y Brasil, por ejemplo, encuentran similares situaciones de falta de licencia social, de legitimidad. El país comienza a ser conocido no sólo por su crecimiento económico sostenido, sino por la proliferación de conflictos socio-ambientales, todavía frecuentemente juntos como caras de una misma moneda.

Hoy Colombia podría encontrarse en una encrucijada, y no se trata de un asunto que se resuelva con recíprocos señalamientos de radicalismo. Para algunos analistas, una situación de posconflicto podría ser más bien una de transición a un conflicto socio-ambiental. Hay que repensar, pues, el ambientalismo entero, pero también los megaproyectos.

Una lección que puede calar es que no deben proponerse megaproyectos concebidos sólo desde una perspectiva de eficiencia sectorial. Existe el riesgo de que se conviertan en economías de enclave en las cuales poco se irradie el beneficio económico y social en lo local. La predominancia de este tipo de intervenciones ha generado una percepción negativa en las comunidades locales y sus voceros: podrían llevar a que la sociedad pierda oportunidades sanas de crecimiento económico y de bienestar social.

En efecto, son muchas las regiones del país en las cuales las fuerzas espontáneas de la economía, sumadas a la debilidad del Estado, no han logrado el despegue de territorios completos. Pero tampoco se trata de territorios que en ausencia de grandes inversiones mantengan sus atributos ambientales. Al contrario, más que fronteras de biodiversidad y ecosistemas sanos, son espacios en los cuales el deterioro ambiental está ligado a la violencia y el atraso social e institucional.

Estos serían los espacios en los cuales una intervención a través de grandes inversiones podría sacarlos de un peligroso rezago social. Serían, además, oportunidades irreemplazables, de mejoramiento ambiental. Hoy conocemos impactos locales, en aras del beneficio general. El país debe conocer nuevos proyectos de inversión en infraestructura energética, o incluso en industrias extractivas, que sean el motor de integración y generación de beneficio local.

Pero no son muchos los nuevos grandes emprendimientos que se están formulando con esta visión. Por eso llama la atención una promesa que se hace en Antioquia: el proyecto hidroeléctrico de Ituango. No porque carezca de impactos ambientales; al contrario, represar un gran río como el Cauca genera impactos muy importantes. Pero mientras duplica la capacidad de generación para las Empresas Públicas de Medellín, con 2.400 megawatts, está siendo concebido como un proyecto de desarrollo regional que podría sacar del rezago a un inmenso territorio, en 12 municipios que quedarían en las goteras de la región urbana de Medellín. Se trata de empresas que entienden que no hay emprendimiento viable en un entorno social degradado. Que están dispuestas, con importantes inversiones, a garantizar la generación de valor compartido en el territorio.

Necesitamos más ejemplos sectoriales para el país que queremos construir.

www.elspectador.com/opinion/editorial/repensar-los-megaproyectos-articulo-5226
14